

COLECCIÓN CASA EUROPA



HISTORIA Y MEMORIA DEL TERRORISMO EN EL PAÍS VASCO



MINISTERIO
DE CULTURA
Y DEPORTE

DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO
Y FOMENTO DE LA LECTURA

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del
Ministerio de Cultura y Deporte

Los criterios y opiniones expuestas en esta obra son responsabilidad exclusiva de sus autores y no afectan a las políticas de las entidades que auspician la edición.

Coordinación de: José Antonio Pérez Pérez

Colaboración de: Sonia Aizpuru Garcés, Javier Merino Pacheco, Martín Alonso Zarza.

© De los textos: Arturo Cajal Valero, Iñaki Fernández Redondo, Javier Gómez Calvo, Irene Moreno Bibiloni, José Antonio Pérez Pérez y Erik Zubiaga Arana.

© Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, 2021.

© Fotografía de cubierta: Manifestación en repulsa por el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Barcelona, 13 de julio de 1997. Referencia: EFE/lafototeca.com. Código de Referencia: 5179784. Foto Andreu Dalmau.

Maquetación: Rodrigo Sepúlveda Cebrián

© Confluencias, 2022

www.editorialconfluencias.com

Impreso en Polonia

ISBN: 978-84-125836-3-2

Depósito legal: AL. 2597-2022

La edición de esta obra ha contado con el apoyo de la Fundación Centro para la Memoria de las Víctimas del Terrorismo



CENTRO
MEMORIAL
DE LAS VÍCTIMAS
DEL TERRORISMO



Instituto
de Historia Social
Gizarte Historiarako
Institutua

Valentín de Foronda



UPV EHU

Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización estricta de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamos públicos.

HISTORIA Y MEMORIA
DEL TERRORISMO EN EL
PAÍS VASCO

1995-2011

VOLUMEN III

Coordinación

José Antonio Pérez Pérez

Autores

Arturo Cajal Valero, Iñaki Fernández Redondo, Javier Gómez Calvo, Irene Moreno Bibiloni, José Antonio Pérez Pérez y Erik Zubiaga Arana

Colaboradores Sonia Aizpuru Garcés, Javier Merino Pacheco, y Martín Alonso Zarza



CONFLUENCIAS
EDITORIAL

Este trabajo se inscribe en el Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco «Nacionalización, Estado y violencias políticas. Estudios desde la Historia Social» (Ref. IT 1531-22; IP Antonio) Rivera.

La fotografía de Miguel Ángel Blanco en el lomo de cada uno de los volúmenes fue realizada por el fotógrafo Larry Mangino, en Ermua, en julio de 1997, coincidiendo con el secuestro y asesinato a manos de ETA de Miguel Ángel Blanco, un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de este municipio. La fotografía es un documento que muestra la solidaridad, el cariño y la cercanía que los españoles sintieron por la familia Blanco Garrido y la denuncia, el hastío y la indignación por la barbarie de ETA. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de Libertad y Democracia para todos los españoles de bien que tienen edad suficiente para el recuerdo. Generosamente Larry Mangino cedió a la Fundación Miguel Ángel Blanco esta fotografía emblemática con dos condiciones: que se respetara en su integridad y que fuera utilizada con el objetivo de preservar la Memoria de las víctimas del terrorismo. Bajo estas dos condiciones, la Fundación Miguel Ángel Blanco cede a la editorial Confluencias su utilización. Dejamos constancia en estas líneas de nuestro agradecimiento a Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco por esta cesión.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

José Antonio Pérez Pérez

1. Un cambio de paradigma: la ponencia <i>Oldartzén</i>	13
2. Un nuevo contexto	18
3. El pacto de Estella y la tregua de 1999	27
4. El regreso del terror	33
5. El final de ETA	43

I

SOCIALIZAR EL SUFRIMIENTO

José Antonio Pérez Pérez

1.1. El asesinato de Gregorio Ordóñez	63
1.2. El terror que no cesa	77
1.3. Fernando Múgica, la siniestra confirmación de <i>Oldartzén</i>	82
1.4. Tomás y Valiente: matar a un rruiseñor	88
1.5. La ley del silencio	94

II

DEL CHANTAJE A LA VENGANZA

José Antonio Pérez Pérez

2.1. El secuestro de Ortega Lara	109
2.2. El asesinato en directo de Miguel Ángel Blanco	123

III

ATENTADOS CONTRA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y FUERZAS ARMADAS (i) 1995-1998. UN ANTES Y UN DESPUÉS

Arturo Cajal Valero

3.1. En el País Vasco y Navarra	152
3.2. En el resto de España	156
3.3. Contra la Ertzaintza	162
3.4. Antes y después de Miguel Ángel Blanco	176

IV

EL CÍRCULO INFERNAL DE LA EXTORSIÓN

Erik Zubiaga Arana

4.1. Matar para recaudar y recaudar para seguir matando	197
4.2. Los carnavales no se detienen. La fiesta continúa	205
4.3. Secuestros, movilizaciones y contramanifestaciones. Aldaya, secuestrado	210
4.4. Neguri en la diana: secuestro y atentados bomba	223

V

ETA CONTRA EL PLURALISMO Y LA LIBERTAD

Javier Gómez Calvo

5.1. Manuel Zamarreño; crónica de una muerte anunciada	243
5.2. El exterminio del PP vasco	251
5.3. Sin tregua	255
5.4. El asesinato de Fernando Buesa o la aniquilación de la oposición parlamentaria	259
5.6. Como alemanes en Mallorca	263
5.7. Matar fuera de Euskadi	271
5.8. ¡Basta ya!	280
5.9. Epílogo criminal	287
5.10. Los últimos zarpazos contra la Justicia	298

VI

ATENTADOS CONTRA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y
FUERZAS ARMADAS (II) 2000-2003. DE NUEVO, LA TRAGEDIA

Arturo Cajal Valero

6.1. El primer atentado tras la tregua	315
6.2. En el País Vasco y Navarra	319
6.3. En el resto de España	333
6.4. La Ertzaintza	350

VII

LA KALE BORROKA EN EL PAÍS VASCO (1990-2011)

Irene Moreno Bibiloni

7.1. <i>Kale borroka</i> : de terrorismo de baja a intensidad a violencia de persecución	369
7.2. Jóvenes y militantes: el compromiso con la causa violenta	376
7.3. El lazo azul: símbolo del proceso de inflexión en la toma de la calle	381
7.4. <i>Oldartzen</i> : el llamamiento definitivo a tomar las calles	385
7.5. Mucho más que cifras: los rostros frente a la <i>Kale borroka</i>	390
7.6. Perseguidos, señalados, hostigados y asesinados: la violencia de persecución	397
7.7. Hacia el final de la <i>Kale borroka</i> : persecución judicial, costes económicos y cese de la actividad terrorista	403

VIII

ATENTADOS CONTRA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD Y FUERZAS ARMADAS (III) 2007-2011. LOS ÚLTIMOS CRÍMENES

Arturo Cajal Valero

8.1. Capbreton	421
8.2. De Legutiano a Calviá	424
8.3. La última víctima mortal de ETA	436

IX

LA EXTORSIÓN FINAL. LOS ÚLTIMOS COLETAZOS (PARTE II)

Erik Zubiaga Arana

9.1. El hostigamiento no cesa, tampoco durante la tregua	449
9.2. Cerco a Adegí. Korta, asesinado	445
9.3. Las finanzas se resienten y el acoso se intensifica	464
9.4. Morir matando. Las otras «causas»	474
9.5. La punta del iceberg	484

X

BUSCANDO UN FINAL. LAS NEGOCIACIONES CON ETA

Iñaki Fernández Redondo

10.1. De la asunción de la estrategia negociadora a las conversaciones de Argel	498
10.2. Entre Argel y Estella pasando por Santo Domingo	505
10.3. La Ley contra el entorno político de ETA	525
10.4. Del caserío a la mesa de negociación. El proceso de 2006	536

XI

EL FINAL DE ETA

Iñaki Fernández Redondo

11.1. «O bombas o votos». La pugna entre ETA y la izquierda <i>abertzale</i> en la senda de la unilateralidad	561
11.2. La culminación por entregas de la derrota de ETA	577
11.3. Las víctimas y el relato	595
11.4. ¿Derrota o abandono? Clarificando el final de ETA	603
Notas	615
Bibliografía	745
Créditos de fotografías	759
Índice onomástico	779

INTRODUCCIÓN

1. UN CAMBIO DE PARADIGMA: LA PONENCIA *OLDARTZEN*.

...el día que un tío del PSOE, PP, PNV va al funeral de un *txakurru* o cien [...] no ve en peligro su situación personal [...], pero el día que vayan a un funeral de un compañero de partido, cuando vuelva a casa quizás piense que es hora de encontrar soluciones o quizás le toque estar en el lugar que estaba el otro (o sea, en una caja de pino y con los pies por delante)¹.

De esta manera tan gráfica y directa se expresaba un miembro de ETA en un boletín interno que publicó la organización terrorista en junio de 1993. Su «reflexión», aunque todavía no se había comenzado a elaborar ni debatir la ponencia *Oldartzen*, expresaba cual sería la estrategia de la banda durante los años siguientes: extender el miedo entre los partidos democráticos que se oponían a ella para «encontrar soluciones», es decir, ampliar el punto de mira de sus atentados, incluir a otra serie de sectores contrarios a ETA entre sus posibles víctimas y socializar el sufrimiento, aunque esta última expresión nunca llegó a aparecer de forma textual en el citado documento. La descarnada

simplicidad de aquella exposición resumía de un modo contundente lo que significaba el terrorismo: un instrumento para lograr por la fuerza de las armas unos objetivos políticos concretos que despreciaban por completo los principios democráticos y la voluntad de los ciudadanos.

Desde finales de los años setenta ETA había apostado por acumular cadáveres sobre una hipotética mesa de negociación con los diferentes gobiernos. Su objetivo era ejercer una presión insostenible con el fin de que estos hincasen la rodilla y se vieran obligados a aceptar unas condiciones que solo tenían un fin: imponer su proyecto totalitario. Sin embargo, tras superar los sangrientos «años del plomo» que pusieron a la democracia española contra las cuerdas, esta se había asentado firmemente y el Estado de Derecho comenzaba, lentamente, pero con firmeza, a vencer al terrorismo. La caída de la cúpula de Bidart que tuvo lugar el 29 de marzo de 1992 fue uno de los golpes policiales, quizás el más importante, en la lucha contra ETA. Como han señalado Alonso, Domínguez y García Rey, «el mito de que la banda no podía ser destruida policialmente se vino abajo y los etarras interiorizaron la idea que de podían desaparecer»². Todavía tendrían que transcurrir casi 20 años para ver el final de la organización terrorista, pero ya nada volvería a ser como hasta entonces dentro de ella. La operación que tuvo lugar en la localidad francesa desbarató el sueño que había alimentado ETA a comienzos de 1992; es decir, lograr, a partir de una serie de importantes atentados, concitar la atención de todos los medios internacionales pendientes de la celebración de los grandes eventos que tendrían lugar en España —la Exposición Universal de Sevilla y, sobre todo, los Juegos Olímpicos de Barcelona— y poner al Gobierno ante una situación insostenible que le hiciera claudicar. Las importantes medidas de seguridad que adoptaron las autoridades y la sustancial mejora que se produjo en la lucha antiterrorista, junto con la colaboración francesa, culminaron en aquella operación que acabó con la detención de Francisco Múgica Garmendia, *Pakito*; José Luis Álvarez Santacristina, *Txelis*, y Joseba Arregi Erostarbe, *Fitipaldi*. La crisis que provocó la caída de la dirección de ETA obligó a la organización terrorista a cambiar de estrategia. Si los asesinatos de guardias civiles y policías no habían servido para resquebrajar al Estado

y lograr que los diferentes gobiernos se tomaran en serio sus exigencias en los distintos procesos de negociación que habían tenido lugar hasta entonces, la banda terrorista extendería sus acciones contra políticos, jueces, fiscales y «terroristas de la pluma»³.

En realidad, el terrorismo *abertzale* en el País Vasco ya había atentado directamente contra dirigentes de diferentes formaciones políticas durante los primeros años de la Transición. Como ya se trató en los capítulos III y IV del primer volumen de esta trilogía, entre 1976 y 1982 la rama militar de ETA mató a varios afiliados de Fuerza Nueva, militantes tradicionalistas y de Alianza Popular. Otro tanto hicieron los CAA con miembros del PSOE y la UCD y los *polimilis*, que acabaron en 1980 con la vida de varios dirigentes de esta última formación. En este caso, la estrategia de ETAp_m, como han recordado Raúl López Romo y Gaizka Fernández Soldevilla, buscaba provocar una «mayor radicalización» que consistía en «causar traumas» tras constatar la escasa efectividad de su actividad terrorista, eclipsada frente al importante eco político y mediático que alcanzaban los numerosos atentados mortales de la rama militar de ETA⁴. Para lograrlo, los *polimilis* optaron, hasta su desaparición definitiva en 1982, por la práctica de un terrorismo más selectivo con el fin de compensar su menor capacidad operativa. No volvieron a producirse atentados mortales contra dirigentes políticos hasta que los CAA acabaron a tiros en 1984 con la vida del senador socialista Enrique Casas⁵.

Pero la situación cambió de forma radical unos años más tarde. Tal y como constató el juez Baltasar Garzón en el año 2002 a raíz del proceso judicial que terminó con la ilegalización de Batasuna, el debate que se abrió en el seno de la izquierda *abertzale* a mediados de los años noventa tenía un objetivo claro: agilizar el funcionamiento de la estructura social y política del entorno de ETA y nutrirlo de actividad⁶. El nombre elegido para designar este proyecto fue *Bizkar Hezurra* (Columna Vertebral) y se desdobló en dos planos paralelos (véase el capítulo X): el primero, llamado *Txinaurri* (hormiga), dedicado a establecer los objetivos e instrumentos para alcanzar la independencia, y *Karramarro* (cangrejo), urdido para crear la estructura idónea capaz de articular estos instrumentos. En el primero de los procesos se trataba de iniciar la «construcción nacional de una

INTRODUCCIÓN

Euskal Herria independiente y socialista» sin esperar a forzar una negociación política con el Gobierno para conseguir la independencia, como habían tratado de hacer hasta ese momento. Fue precisamente a partir de este planteamiento como nació a principios de 1995 la denominada Alternativa Democrática de Euskal Herria, que terminó sustituyendo a la Alternativa KAS⁷.

Por tanto, los objetivos estaban perfectamente delimitados. Tan solo faltaba por definir la segunda fase, *Karramarro*, cuya consecuencia sería la constitución de ETA-KAS como la genuina «columna vertebral» del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Sin embargo, su puesta en marcha implicaba que los miembros de KAS –*Jarra*, HB, LAB, Gestoras...– debían cumplir a rajatabla sus directrices por encima de cualquier otra decisión adoptada por las organizaciones en las que militaban. Según el mismo juez Garzón, esta remodelación de KAS forzó una reforma en la estructura de HB a través del proceso *Oldartzen* que, en definitiva, supuso «la incorporación a la dinámica política de HB de los nuevos objetivos de KAS concretados en la «construcción nacional». Como confirmó un *Zutabe* meses después (septiembre de 1995), «existía un peligro real de caer en un debate tan largo como estéril» entre quienes propugnaban «cambiar la línea de raíz» y «los que no veían esa necesidad o parecían temerosos». «Uno de los elementos que ayudó fue la intervención de la organización, concretamente con la acción contra Ordóñez». De esta forma resumía ETA el valor y la importancia que tuvo su asesinato. En este sentido, el atentado mortal que acabó con la vida del teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián, no sirvió únicamente para extender el miedo y socializar el sufrimiento entre quienes se oponían a la imposición por la fuerza del proyecto *abertzale*, sino también como una prueba de fuego para constatar la consistencia de la nueva estructura y el liderazgo de ETA en todo este proceso.

Pero Ordóñez no fue el primer objetivo de esta nueva estrategia de «socialización del sufrimiento» que se puso en marcha tras la caída de la cúpula de Bidart. El periodista Javier Marrodán recuerda que en diciembre de 1994, un mes antes del asesinato del dirigente más carismático del Partido Popular en el País Vasco, la Guardia Civil desarticuló en Navarra

un comando que pretendía atentar contra varios objetivos, entre ellos el presidente de Unión del Pueblo Navarro, Jesús Aizpún y el expresidente del Gobierno Foral, el socialista Gabriel Urralburu⁸.

Aunque las FCSE lograron evitar aquellos atentados, no pudieron hacer lo mismo con el que acabó con la vida de Gregorio Ordoñez. Su asesinato provocó una enorme conmoción. Tras los crímenes que diezmaron a principios de los años ochenta a las formaciones del centro derecha en el País Vasco ETA no había vuelto a matar a un representante político. La organización terrorista incluso se desmarcó del atentado mortal contra el senador socialista Enrique Casas, cometido por los CAA en 1984. Sin embargo, como se ha apuntado anteriormente, la aprobación de la ponencia *Oldartzen* cambió radicalmente las cosas. El asesinato de Ordoñez, brutal, como lo fueron todos, desencadenó una serie de reacciones políticas que sirvieron para constatar la importancia y gravedad que tuvo aquel crimen. A pesar de ello, ni las duras condenas de los partidos democráticos ni la movilización social que provocó el atentado sirvieron para que ETA replantease su estrategia. Todo lo contrario, quienes decidieron su asesinato percibieron que aquella acción había logrado los objetivos que buscaba: extender el miedo, conmocionar a la sociedad vasca y lanzar un mensaje claro y contundente a las fuerzas políticas y a todos aquellos que se opusieran al proyecto totalitario del terrorismo *abertzale*. Y como prueba de que el atentado contra Ordoñez no sería el último, sino el primero de la nueva estrategia de socialización del sufrimiento, tan solo cuatro meses más tarde, el 19 de abril de 1995, la organización terrorista trató de acabar con la vida de José María Aznar, presidente del PP y jefe de la oposición en aquellos momentos. Aunque no lo logró, debido al blindaje de su coche, ETA dejó claro que tenía los medios necesarios y estaba dispuesta a matar a cualquiera, independientemente del cargo que ostentara. Por si había alguna duda de ello, en agosto de ese mismo año un comando de la organización terrorista preparó un atentado para asesinar en Mallorca al Jefe del Estado, el Rey Juan Carlos I, mientras disfrutaba de sus vacaciones en la isla.

Pero los objetivos de la banda estaban, sobre todo, en el País Vasco, donde disponía de un entorno que apoyaba el asesinato político como instrumento para lograr sus fines. El 5 de febrero de 1996, tan solo un mes

INTRODUCCIÓN

antes de las elecciones generales que darían lugar a la victoria del PP, ETA acabó en San Sebastián con la vida de Fernando Múgica, uno de los líderes más reconocidos y queridos del PSE-EE. El asesinato del abogado donostiarra confirmó lo que ya ha habido adelantado la organización terrorista un año antes, es decir, que los representantes políticos de los partidos de ámbito nacional eran un objetivo prioritario. Las siniestras frases recogidas en aquel boletín interno de ETA publicado en 1993 no eran una simple amenaza ni una «reflexión», sino un avance del giro estratégico emprendido por la banda para extender el terror y hacer comprender, tanto al PP como al PSOE, que estaban dispuestos a apilar los cuerpos sin vida de sus compañeros en el País Vasco sobre una futura mesa de negociaciones para conseguir sus objetivos.

2. UN NUEVO CONTEXTO

El periodo transcurrido entre 1995 y el final del terrorismo de ETA, anunciado por la banda en octubre de 2011, estuvo marcado por el cambio de su estrategia criminal que definió la ponencia *Oldartzzen*, pero también por el devenir de la propia política en el País Vasco a lo largo de esos quince años. Las elecciones autonómicas de 1994 confirmaron la victoria del PNV con un margen que permitió a José Antonio Andanza la formación de un nuevo ejecutivo⁹. La estabilidad que había proporcionado en los últimos años el pacto con los socialistas vascos parecía encaminar a los *jeltzales* a reeditar un gobierno de coalición similar al anterior, pero el fraccionado mapa político vasco, el relativo estancamiento del PNV y el descenso en el respaldo electoral del PSE en beneficio de un PP en alza, obligaron a ampliar el pacto incluyendo a un tercer socio para reforzar la estabilidad del nuevo Gobierno. La opción elegida para ello fue Eusko Alkartasuna, es decir, la escisión surgida en el partido *jeltzale* casi una década atrás, lo que significó que las heridas dentro del nacionalismo, al menos del más moderado, comenzaban a cerrarse. La fallida experiencia del anterior tripartito de 1991 (PNV, EE y PSE) levantó algunas suspicacias entre los futuros socios de Gobierno, pero las circunstancias eran ahora distintas.

La formación de Carlos Garaikoetxea había descendido en votos en los últimos comicios y parecía dispuesta a suavizar sus exigencias acercándose al PNV para tratar de recuperar parte de los apoyos perdidos y frenar su tendencia a la baja. Tampoco para los *jeltzales*, a pesar de la última victoria, se dibujaba un escenario especialmente propicio que alimentase la esperanza de un avance claro hacia la mayoría nacionalista. Después de quince años liderando la autonomía vasca y de los importantes avances logrados en el autogobierno, la violencia de ETA parecía enquistada sin que se atisbase a corto plazo un final cercano y el nacionalismo seguía retrocediendo en el País Vasco (68 por ciento de los votos en las elecciones de 1987 frente al 55 por ciento de los comicios de 1994). En todo caso, el balance para el PNV tras los últimos años de gobierno autonómico con los socialistas había resultado francamente positivo. La formación *jeltzale* era a todas luces quien más se había beneficiado de la evolución política que se había producido desde la puesta en marcha de la autonomía en Euskadi, logrando que una parte importante de la sociedad vasca identificase a este partido como el verdadero motor del autogobierno y del buen nivel de vida que, en general, disfrutaba la sociedad vasca en aquellos momentos tras superar la dura crisis de los años ochenta. Su posición central le había permitido, además, recuperar parte del voto perdido tras la escisión de EA y mantenía en aquellos momentos unas buenas relaciones con el Gobierno de España.

La victoria del Partido Popular en 1996 no cambió sustancialmente las cosas. La formación conservadora logró superar en las elecciones generales celebradas el 3 de marzo al PSOE y romper de este modo con catorce años de gobiernos socialistas encabezados por el carismático Felipe González. Sin embargo, los ajustados resultados de aquellos comicios no permitieron al PP formar un Gobierno en solitario. Para ello necesitaban el apoyo de Convergencia y Unió de Catalunya, pero intentaron un acercamiento con el PNV que asegurase la estabilidad del futuro Ejecutivo presidido por José María Aznar, con la idea de lograr a corto o medio plazo la pacificación del País Vasco. Finalmente, los diputados *jeltzales* apoyaron su investidura a cambio de contrapartidas en el desarrollo autonómico. Con aquel movimiento, los nacionalistas vascos normalizaron su relación con

la derecha española después de muchos años de desencuentros. La buena sintonía entre unos y otros llevó al presidente del EBB, Xabier Arzalluz, a afirmar que Aznar era «un hombre de fiar». Más aun, que «había hecho más por el autogobierno vasco que los demás en veinte (años)», en clara alusión a los socialistas¹⁰. A pesar de ello, el PNV mantenía desde 1987 un gobierno de coalición en el País Vasco con el PSE.

Sin embargo, el acuerdo entre nacionalistas y populares para apoyar al ejecutivo de Aznar evitó pronunciarse sobre el problema más importante, el del terrorismo. Ambas formaciones podían coincidir en temas sociales y económicos, donde los programas y políticas que defendían no eran demasiado diferentes, pero su perspectiva sobre cómo acabar con ETA era muy distinta. Las tensas relaciones entre los dirigentes nacionalistas y el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, el único vasco del ejecutivo de Aznar, tampoco ayudaron a acercar las posturas entre ambas administraciones. Pero hubo otros factores que complicaron este acuerdo. La recuperación que había experimentado el PP durante los últimos años en el País Vasco hacía de esta formación una competidora natural del PNV por un electorado con unas bases sociológicas no muy diferentes. Los primeros desencuentros surgieron a partir de la interpretación de los acuerdos suscritos en 1988 en torno a la Mesa de Ajuria Enea. En 1996 los populares acudieron a las elecciones con un programa que colisionaba en gran parte con lo aprobado por los partidos democráticos vascos en aquel documento, incluido el propio PP. El punto de mayor fricción estaba relacionado con las medidas de reinserción aplicables a los presos de ETA, la política penitenciaria y un posible final dialogado del terrorismo. En la nueva coyuntura, el partido de José María Aznar, que había sufrido en sus propias carnes un intento de asesinato un año antes, decidió apoyar el cumplimiento íntegro de las penas y rechazó cualquier tipo de negociación con la organización terrorista para lograr que dejaran las armas. Además, para completar esta estrategia, el nuevo Gobierno intensificó la acción policial, logrando importantes éxitos en la lucha contra ETA, que se vieron favorecidos por la estrecha colaboración de las autoridades francesas y la acción decidida de la Justicia para acabar de una vez con la violencia que llevaba golpeando a España durante décadas.

Sin embargo, el terrorismo todavía causaría mucho dolor. Todo lo sucedido entre 1996 y julio de 1997 es una buena muestra de ello. Además de los atentados mortales que siguió cometiendo, la organización sometió al Estado de Derecho a una enorme tensión que terminaría explotando tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el joven concejal del PP en Ermua. A lo largo de ese intenso periodo ETA secuestró a varios empresarios vascos para obtener importantes sumas económicas (Julio Iglesias Zamora, José María Aldaya y Cosme Delclaux), algo que terminarían consiguiendo tras largos y penosos cautiverios. El secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara tuvo otro objetivo: lograr el traslado de los presos de la organización terrorista a las cárceles del País Vasco y de paso, dejar claro que lo aprobado en la ponencia *Oldartzen* también afectaba a estos trabajadores y a todos cuantos colaborasen de un modo u otro con la «represión que sufría Euskal Herria», según la versión de ETA. El encadenamiento de todas estas acciones tuvo otros efectos importantes que no estaban contemplados en la agenda de la organización terrorista: la respuesta de la sociedad vasca. Gracias a la perseverancia de las organizaciones pacifistas, especialmente de Gesto por la Paz, estas lograron articular toda una serie de movilizaciones para pedir la libertad de los secuestrados. Lo ocurrido durante el cautiverio de Julio Iglesias Zamora descolocó a la banda, pero sobre todo, al entorno político que la sostenía. Hasta ese momento los secuestros de empresarios no habían desencadenado una respuesta social destacable, sin embargo, lo ocurrido con aquel caso cambió las cosas. Aunque ETA logró sus objetivos económicos, la movilización que se produjo a lo largo de los meses que duró el cautiverio del empresario sembró la semilla de una contestación social que se incrementaría durante los años siguientes en defensa de las víctimas del terrorismo, algo que se puso de manifiesto tras el largo e inhumano secuestro de Ortega Lara. La banda lo utilizó para tensar hasta el máximo la situación, extendiendo su «frente de lucha» a las calles del País Vasco mediante la convocatoria de contramanifestaciones para acosar y amedrentar a quienes siguieron manifestándose, pidiendo la libertad de José María Aldaya y del funcionario de prisiones. Fue uno de los periodos más tensos que se vivieron

INTRODUCCIÓN

en el País Vasco. A un lado, los pacifistas que reclamaban la libertad de dos personas secuestradas, de dos seres humanos enterrados en vida. Al otro, la izquierda *abertzale*, acosándolos y agredéndolos, para recordarles que la calle seguía siendo suya y nadie tenía derecho a manifestarse contra ETA, aunque fuese de forma silenciosa.

La liberación de Ortega Lara por parte de efectivos de la Guardia Civil la noche del 1 de julio de 1997 fue, sin duda, un éxito de este cuerpo, pero significó mucho más, la constatación de la fuerza del Estado de Derecho frente al chantaje de ETA. Y la banda respondió con toda la furia y el resentimiento del que era capaz, secuestrando a un joven que había sido elegido concejal por el PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Su único delito: comparecer en unas elecciones municipales en la lista de un partido democrático con el objetivo de representar a sus vecinos y mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Lo ocurrido durante esos días de julio con aquella especie de ejecución sumarísima retransmitida a tiempo real, demostró hasta qué punto había llegado la crueldad de la organización terrorista, su desprecio por la vida de un ser humano y por la propia voluntad de la sociedad vasca. ETA fue fiscal, juez y verdugo. La impresionante movilización que se produjo en toda España después de aquel asesinato no sirvió para que la organización terrorista replantease su estrategia, pero sí la de los partidos democráticos, al menos durante un tiempo.

Tras la conmoción que provocaron aquellos sucesos los firmantes del Pacto de Ajuria Enea acordaron aislar políticamente a Herri Batasuna. Pero esta decisión solo se materializó en la localidad guipuzcoana de Mondragón, donde PNV, EA, PSE-EE y PP sumaron sus votos y lograron desplazar de la alcaldía a la coalición *abertzale* que gobernaba en minoría. Sin embargo, aquella unidad de acción saltaría por los aires en poco tiempo. A ello contribuyó el clima de desconfianza que comenzó a extenderse a lo largo de los meses siguientes entre las propias formaciones democráticas que habían suscrito el «Acuerdo para la normalización y Pacificación de Euskadi». El PNV y EA comenzaron a temer que aquella ola de rechazo contra ETA y de aislamiento de su brazo político podría terminar afectando a todo el nacionalismo en su conjunto y empezaron a explorar otras vías para reforzar su posición en el nuevo escenario político creado

tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Durante el verano de 1998 la prensa recogió numerosas declaraciones de dirigentes nacionalistas, sobre todo del PNV, que ponían en cuestión las alianzas que habían ido tejiendo las formaciones democráticas, abriendo la puerta a hablar con HB, e incluso con la organización terrorista para propiciar el final de la violencia¹¹. A lo largo de aquellos meses pasaron muchas cosas que contribuyeron a ir ensanchando una brecha cada vez más ancha y profunda entre unos y otros. Lo ocurrido durante el concierto celebrado en Madrid en el mes de septiembre en memoria del concejal de Ermua, en el que se produjeron gritos y abucheos por parte de un sector del auditorio contra el cantautor Raimon por cantar en catalán, levantó más suspicacias aún entre los nacionalistas vascos. Tanto el PNV como EA (y no solo ellos, también los partidos de la izquierda), acusaron a los populares de instrumentalizar el acto, imponiendo una concepción de España en la que no tenían cabida otras expresiones ni manifestaciones culturales y políticas más allá de la que defendía el partido en el Gobierno. Fue solo un incidente pero sirvió para seguir ahondando en un proceso de alejamiento entre los jeltzales y el PP que en aquellos momentos parecía irreversible.

Todo ello sucedió bajo la influencia de un determinado contexto internacional: las negociaciones que tuvieron lugar en Irlanda del Norte que desembocaron en la firma de los acuerdos de Viernes Santo en el mes de abril de 1988, suscritos entre los gobiernos británicos e irlandés, para poner fin al conflicto que se vivía en aquella zona. Su historia poco tenía que ver con lo ocurrido en el País Vasco, pero para en el nacionalismo era uno de sus referentes más importantes. Como ha recordado el historiador Santiago de Pablo¹²:

Dado que Irlanda había sido –desde la I Guerra Mundial– un espejo donde el nacionalismo vasco buscaba reflejarse, el inicio del fin del terrorismo del IRA y el reconocimiento del derecho de autodeterminación por parte del Gobierno británico eran una oportunidad que ni el PNV ni HB podían dejar pasar y de ahí que buscaran la sincronización del proceso vasco e irlandés¹³.

INTRODUCCIÓN

Lo sucedido en Irlanda del Norte y la vía que se emprendió para acabar con el terrorismo en aquel país fue calando con fuerza en ciertos sectores del nacionalismo vasco. Uno de los primeros pasos se dio en enero de 1996. *Elkarrri*, reconvertida en un movimiento social favorable al diálogo entre ETA y el Gobierno, tras el éxito alcanzado por su antecesora, la coordinadora *Lurraldea* en el conflicto de la autovía de Leizorán, celebró su Iª Conferencia de Paz y comenzó a sentar las bases de un modelo para «resolver el contencioso vasco».

Este contexto favoreció que aflorara la sensibilidad más soberanista dentro de un influyente sector del PNV que aspiraba a superar el Estatuto de Autonomía de Guernica. El rumbo que fue tomando aquella deriva suponía romper con el marco constitucional, acercándose a HB para lograr el fin de ETA a cambio de profundizar en una vía que desembocase en el reconocimiento del derecho de autodeterminación (enmascarado como «derecho a decidir»). Uno de los hitos más importantes en este proceso tuvo lugar precisamente en la villa foral, donde el sindicato nacionalista ELA organizó un acto el 18 de octubre de 1997, en el que su secretario general José Elorrieta declaró que el Estatuto «había muerto», anunciando la ruptura del marco de convivencia que había servido para desarrollar el autogobierno durante dos décadas, y la unidad de acción que confirmaría poco después con LAB, el sindicato del brazo político de ETA. No se trataba de una declaración más¹⁴. ELA era la organización con mayor número de afiliados del País Vasco, alrededor de cien mil y aunque mantenía en los últimos años una tensa relación con el PNV, era uno de los puntales más importantes de la comunidad nacionalista.

A lo largo de aquel periodo el Gobierno de Aznar intensificó la lucha policial contra la organización terrorista, logrando importantes éxitos en este terreno. A ello contribuyó también en gran medida la implicación de la Justicia y la estrecha colaboración internacional contra ETA, sobre todo la francesa. A diferencia de lo ocurrido durante años, el acoso contra la organización terrorista se extendió hacia su brazo político. De este modo, en diciembre de 1997 los 23 miembros de la Mesa Nacional de HB ingresaron en la cárcel, tras haber sido condenados por

colaboración con banda armada (véase el capítulo X). La medida provocó un gran revuelo, sobre todo en medios nacionalistas, pero lejos de lo que podría imaginarse en un primer momento, la entrada en prisión de los dirigentes *abertzales* no dio lugar a una reacción social especialmente destacable¹⁵. Dos años más tarde, la sentencia sería anulada por el Tribunal Constitucional, dando la razón, en parte, a quienes, como el PNV, habían criticado su base jurídica¹⁶.

El 13 de febrero de 1998, un grupo de intelectuales, periodistas, profesores y víctimas del terrorismo constituyeron un nuevo colectivo, el Foro Ermua, en memoria de la reacción que había tenido lugar unos meses antes en la localidad vizcaína tras el asesinato del joven concejal del PP. Sus objetivos fundamentales eran bien claros: apoyar a las víctimas del terrorismo, propiciar la unidad de las fuerzas constitucionalistas en el País Vasco frente a la deriva que comenzaba a tomar el nacionalismo, denunciar la impunidad del entramado que apoyaba a ETA y rechazar cualquier tipo de negociación política con la organización terrorista para propiciar el final de la violencia¹⁷. Los firmantes del manifiesto que sirvió para presentar al Foro Ermua entendían que no era suficiente manifestarse en silencio contra los asesinatos; había que defender de forma activa y sin complejos los principios e instituciones democráticas y el Estado de Derecho en el País Vasco. Ese mismo día, el *lebendakari* Ardanza presentó un plan para tratar de actualizar el consenso logrado diez años antes con vistas a buscar una solución dialogada a la violencia de ETA. Sin embargo, para entonces la situación había cambiado y los partidos *abertzales* habían iniciado ya un giro hacia el soberanismo que se concretaría en la firma del Pacto de Estella.

El nacionalismo recibió con abierta hostilidad el manifiesto del Foro Ermua. El 10 de marzo, tan solo unas semanas después de su presentación en sociedad, *El Periódico de Álava* publicó un cuento-artículo en euskera de Carlos Caballero, diputado por el PNV. Bajo el título «Una vez sucedió en Ermua», contaba la historia de la ocupación de la localidad vizcaína durante la Edad Media por las «ratas procedentes de Hispania». Los roedores terminaban por comerse a todo el pueblo después de que las autoridades políticas y religiosas, excepto el alcalde, huyeran «al otro

lado del río Ebro» tras ver cómo fracasan los intentos por exterminarlas. En un pasaje del cuento se indicaba que el pueblo «estuvo matando con sus propias manos a las ratas». La difusión de aquella historia tuvo un enorme eco en los medios y provocó verdadera indignación entre los partidos no nacionalistas. Buena parte de la población de Ermua había llegado a Vizcaya en los años sesenta procedentes de otros lugares de España y la carta no podía ser más explícita. Aunque algunos dirigentes nacionalistas como Iñaki Anasagasti, portavoz en el Congreso en aquellos momentos, se desmarcaron del contenido del artículo y afirmaron que se trataba tan solo de un texto «poco afortunado», el mal ya estaba hecho. El autor del cuento trató de aclarar que no se refería a los vascos nacidos fuera del País Vasco, sino a «otras ratas», a quienes puso nombres y apellidos: Carlos Torotica, Carlos Iturgaiz, Jon Juaristi, Fernando Savater, José María Carrascal y Jaime Mayor Oreja «que con tal de medrar y manejar los hilos del poder son capaces de manipular los hilos del poder hasta el hartazgo». Lejos de disipar las dudas sobre las intenciones del diputado del PNV sus declaraciones tan solo sirvieron para crispar más los ánimos. Más allá de la incomodidad que sentía el PNV por lo ocurrido en Ermua tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el contenido de aquel cuento revelaba algo mucho más profundo y preocupante: la persistencia de una pulsión xenófoba y excluyente que seguía latiendo con fuerza en algunos representantes *jeltzales* frente a la inmigración española.

Durante los meses siguientes la organización terrorista se cebó especialmente con los concejales del Partido Popular. El 9 de enero ETA mató a José Ignacio Iruretagoyena, edil de esta formación en Zarauz. Unas semanas después, el día 30, asesinó en Sevilla a Alberto Jiménez-Becerril, concejal popular del Ayuntamiento de la capital andaluza y a su esposa, Ascensión García Ortiz. El 20 de mayo acabó con la vida de Tomás Caballero, representante de UPN en el consistorio de Pamplona y dos días más tarde mató en Vitoria al subteniente de la Guardia Civil retirado, Alfonso Parada. Para cerrar este capítulo sangriento la organización terrorista asesinó el 25 de junio en Rentería a Manuel Zamarreño, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana. Su crimen, como ocurrió en otros casos, fue la crónica de una muerte anunciada, en

este caso de un verdadero linchamiento por parte del entorno de la banda terrorista, que se encargó de señalar y acosar a la víctima antes de matarle a sangre fría. Con toda esta serie de atentados ETA lanzó un mensaje, tanto al gobierno como a las fuerzas políticas que se oponían al proyecto totalitario que trataba de imponer por la fuerza de las armas; la reacción social que se había desatado meses atrás por el asesinato de Miguel Ángel Blanco significaba nada para ella y estaba dispuesta a seguir extendiendo el terror dentro y fuera del País Vasco. Para entonces la tensión entre los dos socios que formaban parte del Ejecutivo autónomo era máxima.

La temperatura política en el País Vasco se elevó unos cuantos grados más el 15 de julio de 1998, cuando el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, entró en el edificio que albergaba los talleres del periódico *Egin* al frente de más de 200 policías y clausuró la rotativa, así como la emisora *Egin Irratia*, lo que supuso el cierre de ambos medios de comunicación y la detención de once directivos de la editora Orain S.A., al considerar que estaban «integrados en ETA»¹⁸. La ejecución por mandato judicial de una medida tan extrema y poco frecuente provocó el rechazo no solo del mundo *abertzale*, sino de las formaciones nacionalistas en su conjunto y de una gran parte de la izquierda. Este fue el ambiente previo en que se produjeron los contactos entre PNV, EA y ETA que culminaron en la firma del Pacto de Estella y la tregua que declaró poco después la organización terrorista.

3. EL PACTO DE ESTELLA Y LA TREGUA DE 1999

Como se aborda ampliamente en el capítulo X, el 30 de julio de 1998, en un punto inconcreto del sur de Francia, Joseba Egibar y el ya fallecido *burukide* Gorka Agirre se sentaron con el dirigente de ETA, Mikel Albisu, *Antza* y con Bixente Goikoetxea, *Wilby*, entonces integrado en el aparato logístico de la banda y actualmente uno de los responsables de Sortu. Aquel primer contacto fue el inicio de una serie de reuniones que terminarían materializándose unas semanas más tarde en el anuncio de la tregua por parte de la organización terrorista. Pero para que este proceso culminase con éxito fue necesario que PNV y EA alcanzasen primero

INTRODUCCIÓN

un acuerdo de carácter secreto con la organización terrorista que sellase claramente el compromiso de las dos partidos nacionalistas para avanzar en el camino de la independencia (véase el capítulo X). Tras ello, el 12 de septiembre 23 representantes de diversas formaciones, sindicatos y otros colectivos suscribieron un acuerdo que sería calificado de histórico: el conocido como Pacto de Estella. Entre los firmantes se encontraban, además del PNV y EA, Euskal Herritarrok, la nueva marca de Herri Batasuna y buena parte de sus organizaciones satélite, los sindicatos LAB, ELA, STEE-EILAS y ENHE, EB-IU junto a algunas pequeñas fuerzas de la izquierda, como *Zutik* y *Batzarre*, la asociación pacifista *Bakea Orain* y *Elkarri*¹⁹. Todos ellos se presentaron en la localidad navarra que daba nombre al acuerdo con amplias sonrisas y en mangas de camisa, como si se tratase de una fiesta. Y en cierto modo lo era. El lugar no había sido escogido al azar. Estella había sido la cuna del proyecto del Estatuto de 1932 y el pueblo natal del histórico dirigente *jeltzale* Manuel de Irujo. El ambiente que rodeó la histórica cita fue de enorme expectación. Los firmantes estaban exultantes. Y no era para menos. El documento era el resultado de unas conversaciones que habían logrado la cuadratura del círculo, recuperar el espíritu que se rompió en Chiberta en 1977 y lograr lo que no habían conseguido durante décadas: ponerse de acuerdo para impulsar un proceso soberanista. Como era de esperar por la posición crítica que habían mantenido durante aquel proceso, tanto el PSE como el PP criticaron duramente el pacto. Ramón Jáuregui afirmó que la firma de aquel documento suponía «paz a cambio de imponer el proyecto nacionalista» y Carlos Iturgaiz descartó que el acuerdo fuera a traer la paz, acusando al PNV de «ser más rehén que nunca de ETA». Solo Jesús Eguiguren y Odón Elorza se desmarcaron de la línea oficial de los socialistas y pidieron al PSOE que «no cerrase todas las puertas» y aprovecharse aquella oportunidad²⁰.

La declaración de la tregua por parte de ETA que se produjo tan solo unos días después de aquel acto sirvió para dar alas a las fuerzas soberanistas. El Gobierno de Ardanza, por boca de su portavoz, recibió la noticia con solemnidad y habló de «una nueva etapa en Euskadi». En la misma línea se manifestaron el resto de las fuerzas políticas que habían

firmado el acuerdo. A pesar de los recelos, incluso los partidos constitucionalistas, unos más que otros, expresaron su esperanza de que aquella tregua significase el principio del fin del terrorismo que había asolado al País Vasco durante décadas. Como ha recordado Javier Ugarte:

Garaikoetxea se alegraba; «hay personas que hoy dormirán más tranquilas». Pérez Rubalcaba, portavoz parlamentario del PSOE, prudente, habló de oportunidad y riesgo; «del riesgo de buscar soluciones al margen de la Constitución y el Estatuto». Aznar estaba en Perú. Mayor Oreja de «una estrategia de frente nacionalista y ahí cada uno aporta su parte», aludiendo a un acercamiento entre ETA y el PNV. Eran la voz más negativa. [...] El optimismo prevalecía incluso entre la clase política. La aún dirigente socialista Rosa Díez decía que «lo que nos toca ahora a los demócratas es seguir trabajando juntos para convertir esta tregua en el abandono definitivo de las armas». Felipe González consideraba que era una oportunidad para que una oferta «condicionada» se convirtiera en una paz incondicionada»²¹.

El tono general fue de esperanza, sobre todo en el País Vasco, donde a pesar de que siguieron produciéndose actos de *kale borroka*, comenzó a extenderse la creencia de que «la paz era posible» y aquel proceso que lo había impulsado podría hacerla irreversible. En ese clima se celebraron las elecciones autonómicas del 25 de octubre de 1998, que registraron un 70 por ciento de participación, once puntos más que en 1994. Euskal Herriarrok (la suma de la coalición HB más independientes y *Zutik*) logró tres parlamentarios más que los obtenidos en los últimos comicios y se hizo con catorce sillones en la Cámara vasca, superando al PSE-EE y convirtiéndose en la tercera fuerza política. Por delante de ellos quedaba un PP muy fortalecido, con dieciséis escaños y un victorioso PNV con 21. Sin mayorías absolutas los resultados abocaron de nuevo a la búsqueda de un gobierno de coalición, pero la situación era en aquellos momentos, a pesar de la tregua, mucho más complicada que en anteriores ocasiones. Los socialistas vascos habían abandonado unos meses atrás el Ejecutivo debido a la nueva orientación del PNV y la firma del Pacto de Estella no había hecho más que confirmar sus sospechas; los nacionalistas apostaban por una vía absolutamente diferente y contraria a la política que había seguido en las últimas décadas, al opojar un frente exclusivamente soberanista.

INTRODUCCIÓN

Finalmente, PNV y EA llegaron a un acuerdo para formar un gobierno en minoría, con el apoyo externo de EH, tal y como se confirmó unas semanas más tarde.

Como se recuerda en el capítulo X, el Gobierno, aunque con precaución, tomó en serio el anuncio de la tregua, más allá de los recelos mostrados por el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, quien sostuvo de forma insistente que aquella era una «tregua-trampa» que sería aprovechada por la organización terrorista para rearmarse y fortalecer su posición política. El tiempo (y la propia ETA) le darían la razón. Frente a esta postura, los firmantes del pacto de Estella comenzaron a hablar de «un proceso ilusionante» de resolución del conflicto. Ciertamente cesaron los asesinatos, pero no el acoso al que eran sometidos los concejales y cargos públicos de los partidos constitucionalistas, ni la extorsión económica contra los empresarios. Por un lado, sufrían las invectivas de los representantes de los partidos que habían suscrito aquel acuerdo soberanistas, tachándoles de «enemigos de la paz» y de poner «palos en las ruedas» para hacer descarrilar aquel proceso. Pero por el otro, estaba la *kale borroka*. De hecho, *Jarraia*, la organización juvenil de la izquierda *abertzale* salió públicamente dos días después de que ETA declarase aquel alto el fuego para decir que «la pelea de los jóvenes vascos no tiene tregua», dejando claro que al margen de la decisión adoptada por la organización terrorista, sus militantes seguirían apoyando los ataques que se habían recrudecido en los últimos meses²².

Más allá de la postura mantenida por el ministro del Interior, el Gobierno comenzó a dar algunos pasos importantes, como se recuerda en el capítulo X. Unas semanas después del comunicado de la organización terrorista, el 3 de noviembre, la Agencia *Efe* distribuyó un despacho en el que confirmaba que Aznar había autorizado contactos con el entorno de la banda terrorista ETA. Según fuentes del Gobierno, los contactos con el Movimiento de Liberación Nacional Vasco (de este modo se refirió el propio presidente a ETA) tenían como objetivo «acreditar» la voluntad de la organización terrorista de «dar los pasos necesarios para abrir un proceso de paz mediante el cese definitivo de la violencia»²³.